



PRF N° 80503-2017-28946 Ecopetrol – Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

## Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022

**POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE EL GRADO DE CONSULTA DEL AUTO  
DE ARCHIVO PARCIAL No.400 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

<b>EXPEDIENTE</b>	PRF- 80503-2017-28946
<b>CUN</b>	AC-80503-2019-28222
<b>PROCEDENCIA</b>	Gerencia Departamental Colegiada del Meta
<b>ENTIDAD AFECTADA</b>	Empresa colombiana de Petróleos- ECOPETROL Nit.899.999.068-1
<b>PRESUNTOS RESPONSABLES</b>	<p><b>Corporación Red país Rural</b> Nit. 830.131.208. R/L Fredy Antonio Vargas Contratista</p> <p><b>Giuliana Cortés Forero</b> C.C. N° 52.267.791 Ordenadora del gasto convenio 5211512</p> <p><b>Claudia Patricia Parra</b> C.C. N° 63.296.556 Ordenadora del gasto para el convenio 5211512</p> <p><b>Claudia Patricia Velásquez Mantilla</b> C.C. N°63.445.728 Funcionaria autorizada de consumibles</p> <p><b>Ana Milena Estupiñán Pinto</b> C.C. N° 63.493.663 Gestora técnica (interventoría ECP)</p> <p><b>Julio César Zuleta Fuentes</b> C.C. N° 79.524.894 Líder grupo regional gestión social Meta Vichada</p> <p><b>Maribel Cuestas Bohórquez</b> C.C. N° 21.178.884 Profesional II. Gestor técnico coordinación viabilidad social.</p>
<b>TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE</b>	Seguros Colpatria S.A. Nit.860.002.184-6 Póliza de manejo global tipo: Infidelidad N° 30

PRF N° 80503-2017-28946 Ecopetrol – Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

## Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022

<b>CUANTÍA INICIAL</b>	\$288.711.714
<b>CUANTÍA IMPUTACION</b>	\$288.711.714
<b>TRAMITE</b>	Ordinario – Única instancia.
<b>PROVIDENCIA EN CONSULTA</b>	Auto No. 400 del 06 de septiembre de 2022.

### **LA CONTRALORA DELEGADA INTERSECTORIAL No. 6 PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL, INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,**

Con fundamento en lo establecido en el numeral 5 del artículo 268 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No. 04 del 18 de septiembre de 2019, en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente las conferidas en el artículo 57 de la Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020, y el numeral 1° del artículo 64F del Decreto Ley 267 de 2000, adicionado por el artículo 20 del Decreto Ley 2037 de 2019, la Resolución Organizacional No. OGZ-0737 del 4 de febrero de 2020 y la Resolución Organizacional No. OGZ-0748 del 26 de febrero de 2020, el Decreto 2037 del 7 de noviembre de 2019, que otorga facultades a los Contralores Delegados Intersectoriales de la Unidad de Responsabilidad Fiscal para adelantar la segunda instancia de los procesos de responsabilidad fiscal conocidos en el Nivel Desconcentrado de la Contraloría General de la República, procede, como le corresponde, a resolver el grado de consulta del Auto Mixto No. 400 del 06 de septiembre de 2022, por haberse proferido imputación y archivo parcial, por la Gerencia Departamental Colegiada del Meta en el trámite del PRF N° 80503-2017-28946.

#### **I. ANTECEDENTES:**

El antecedente proviene del hallazgo fiscal producto de la Auditoría, realizada a la Empresa Colombiana de Petróleo- Ecopetrol, por la Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía- periodo evaluado 2015.

#### **II. HECHOS:**

De acuerdo con el auto No. 054 del 19 de febrero de 2021, por medio del cual se ordenó la apertura del presente proceso de responsabilidad fiscal, los hechos objeto de investigación son los siguientes:



PRF N° 80503-2017-28946 Ecopetrol – Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

## Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022

1. ECP S.A. celebra con la fundación RED PAIS RURAL el Convenio de Colaboración No. 5211512 de 2012 que tenía por objeto "Fortalecimiento de las Capacidades productivas de las asociaciones y sectores productivos identificados como altamente competitivos en el marco de los procesos y planes regionales de desarrollo desde una perspectiva de sostenibilidad y corresponsabilidad institucional, suscrito el 11 de julio de 2012. Los aportes realizados por ECP asciende a \$3.375.000.000 y de CORPORACION PAIS RURAL \$135.000.000 Para un plazo de ejecución de 18 meses.

2. El día 28 de abril del año 2014 se finaliza el convenio mediante acta. Y en el mes de octubre se requiere al contratista para hacer pagos a proveedores, quien manifiesta tener embargado la cuenta bancaria que contiene el recurso del Convenio por la DIAN, una vez se verifica por ECP esta situación se evidencia que el recurso no se encuentra en bancos.

3. El 27 de febrero de 2016 se liquida el Convenio<sup>3</sup>, resultando un saldo a favor de ECP por la suma de **\$3.043.984.518,01**; los cuales a la fecha de la auditoria no habian sido reintegrados.

BALANCE GENERAL DEL CONVENIO 5211512							
CONVENIO	APORTE DE ECOPETROL	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO FINANCIERO	% EJECUTADO TECNICO	VALOR NO EJECUTADO	% NO EJECUTADO	% NO EJECUTADO TECNICO
PRIMIGENIO	\$ 3.375.000.000,00	\$2.781.935.296,64	82%	82%	\$ 593.064.703,35	18%	18%
ADICIONAL No. 1	\$ 2.000.000.000,00	\$1.906.288.286,00	95%	61%	\$ 93.711.714,00	5%	39%
ADICIONAL No. 2	\$ 4.523.522.998,00	\$2.192.877.838,00	48%	65%	\$ 2.330.655.360,00	52%	55%
ADICIONAL No. 3	\$ 2.347.605.691,00	\$2.016.586.633,00	86%	100%	\$ 331.019.058,00	14%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$12.246.138.689,00</b>	<b>\$ 8.897.687.853,64</b>	<b>73%</b>	<b>77%</b>	<b>\$ 3.348.450.835,35</b>	<b>22%</b>	<b>23%</b>
REINTEGRO DEL CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO					\$ 304.456.317,35		
REDIMIENTOS FINANCIEROS EN LA FIDUCIA					\$ 85.211.725,15		
<b>SALDO A FAVOR DE ECOPETROL</b>					<b>\$ 3.043.984.518,01</b>		

4. La totalidad del recurso aportado fue debitado de la cuenta bancaria, no obstante, no fue ejecutado en la obra como se evidencia en el avance técnico de la misma. Pues claramente el porcentaje no ejecutado en cada desembolso corresponde a un valor mayor que al considerado en las actas que soportaron el desembolso. En conclusión, los recursos no se encuentran ejecutados en obra como tampoco en la cuenta bancaria.

5. La Aseguradora Solidaria de Colombia, la cual ampara el Convenio investigado, reconoce una parte del valor determinado como detrimento patrimonial (\$2.755.272.804). El valor restante (\$288.711.714) no lo reconoce por objetar parcialmente la reclamación, toda vez



PRF N° 80503-2017-28946 Ecopetrol – Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

## Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022

*que corresponde al giro de Recurso en el Adicional N° 1, el cual no fue girado a la Cuenta de Fiducia sino a la cuenta directa del contratista”.*

### III. PRINCIPALES ACTUACIONES PROCESALES:

1. Auto N° 054 de fecha 19 de febrero de 2021<sup>1</sup>, por medio del cual la Gerencia Departamental Colegiada del Meta, profiere apertura del proceso ordinario de responsabilidad fiscal N° 80503-2017-28946, vinculando como presuntos responsables a: Corporación Red País Rural, identificado con Nit. 830.131.208. R/L Fredy Antonio Vargas Ramírez, en calidad de contratista; Giuliana Cortés Forero, identificada con C.C. N° 52.267.791 en calidad de ordenadora del gasto para el convenio 5211512; Claudia Patricia Parra Díaz, identificada con C.C. N° 63.296.556, ordenadora del gasto para el Convenio 5211512; Claudia Patricia Velásquez Mantilla, identificada con C.C. N° 63.445.728 en calidad de funcionaria autorizada de consumibles – Ecopetrol; Ana Milena Estupiñán Pinto, identificado con C.C. N° 63.493.663 en calidad de gestora técnica – interventoría ECP; Julio César Zuleta Fuentes, identificado con C.C. N° 79.524.894 en calidad de líder grupo regional gestión social Meta- Vichada – Ecopetrol; Maribel Cuesta Bohórquez, identificada con C.C. N° 21.178.884 en calidad de profesional II gestor técnico coordinación viabilidad social, comunicada a Felipe Bayón Pardo presidente de Ecopetrol, mediante oficio 2021EE0060811 de fecha 21 de abril de 2021<sup>2</sup>, notificado a los presuntos responsables de la siguiente manera:

PRESUNTO RESPONSABLE	TIPO DE NOTIFICACION	FECHA DE NOTIFICACION
Ana Milena Estupiñán	Aviso N° 122-2021	6/05/2021 <sup>3</sup>
Claudia Patricia Parra Díaz	Correo electrónico	2/06/2021 <sup>4</sup>
Claudia Patricia Velásquez Mantilla	Aviso N° 103-2021	13/05/2021 <sup>5</sup>
Corporación Red País Rural	Aviso N° 104-2021	13/05/2021 <sup>6</sup>
Giuliana Cortés Forero	Aviso N° 121-2021	06/05/2021 <sup>7</sup>
Julio César Zuleta Fuentes	Correo electrónico	03/05/2021 <sup>8</sup>
Maribel Cuesta Bohórquez	Aviso N° 128-2021	09/05/2021 <sup>9</sup>

<sup>1</sup> Visible expediente digital siref 17\_10-auto apertura.pdf

<sup>2</sup> Visible expediente digital siref 19\_12-notificaciones.pdf

<sup>3</sup> Visible expediente digital siref 19\_12\_notificaciones.pdf

<sup>4</sup> Visible expediente digital siref 19\_12\_notificacion.pdf

<sup>5</sup> Visible expediente digital siref 19\_12\_notificaciones.pdf

<sup>6</sup> Visible expediente digital siref 19\_12\_notificaciones.pdf

<sup>7</sup> Visible expediente digital siref 19\_12\_notificaciones.pdf

<sup>8</sup> Visible expediente digital siref 19-12 notificaciones.pdf

<sup>9</sup> Visible expediente digital siref 19\_12\_notificaciones.pdf



PRF N° 80503-2017-28946 Ecopetrol – Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

## Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022

2. Auto N° 075 de fecha 1 de marzo de 2022<sup>10</sup>, por medio del cual la Gerencia Departamental Colegiada del Meta, decreta prueba de oficio y resuelve solicitud de pruebas, dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal N° 80503-2017-28946.
3. Auto N° 145 de fecha 21 de marzo de 2022<sup>11</sup>, por medio del cual la Gerencia Departamental Colegiada del Meta, vincula a un tercero civilmente responsable e incorpora pruebas documentales en calidad de pruebas trasladadas y se corre traslado a las partes procesales y decreta pruebas de oficio, dentro del proceso de responsabilidad fiscal N° 80503-2017-28946.
4. Auto N° 178 de fecha 11 de mayo de 2022<sup>12</sup>, mediante el cual la Gerencia Departamental Colegiada del Meta, reconoce personería jurídica dentro del proceso de responsabilidad fiscal N° 80503-2017-28946.
5. Auto de vinculación y desvinculación N° 237 de fecha 8 de junio de 2022<sup>13</sup>, dentro del proceso de responsabilidad fiscal N° 80503-2017-28946.
6. Auto N° URF2 0851 de fecha 13 de julio de 2022<sup>14</sup>, por medio del cual se resuelve el grado de consulta dentro del proceso de responsabilidad fiscal N° 80503-2017-28946.
7. Auto N° 400 de fecha 6 de septiembre de 2022<sup>15</sup>, mediante el cual la Gerencia Departamental Colegiada del Meta, profiere vinculación y archivo parcial, dentro del proceso de responsabilidad fiscal N° 80503-2017-28946.
8. Resolución reglamentaria ejecutiva REG-EJE-0063-2020 del 16 de marzo de 2020, por la cual se suspenden términos dentro de los Proceso Auditores, Administrativos Sancionatorios, Disciplinarios, Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva, Indagaciones Preliminares, Peticiones y demás actuaciones administrativas que se adelanten en la Contraloría General de la República a partir del 16 y hasta el 31 de marzo de 2020". Resolución reglamentaria ejecutiva REG-EJE-0064-2020 del 30 de marzo de 2020, "*por la cual se suspenden términos dentro de las Indagaciones Preliminares Fiscales, los Procesos de Responsabilidad Fiscal, de Jurisdicción Coactiva, Disciplinarios y Sancionatorios, que se adelantan en la Contraloría General de la República*" a partir del 1° de abril de 2020. Resolución reglamentaria ejecutiva REG-EJE-0066-2020 del 2 de abril de 2020, "*por la cual se*

<sup>10</sup> Visible expediente digital siref 75\_37\_auto pruebas.pdf

<sup>11</sup> Visible expediente digital siref 98\_51\_auto 145.pdf

<sup>12</sup> Visible expediente digital siref 116\_69\_auto 178.pdf

<sup>13</sup> Visible expediente digital siref 121\_auto 237.pdf

<sup>14</sup> Visible expediente digital siref 127\_urf7-0851.pdf

<sup>15</sup> Visible expediente digital siref 129\_auto 400.pdf

PRF N° 80503-2017-28946 Ecopetrol – Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

## Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022

*suspenden las labores administrativas y misionales que se adelantan en la Contraloría General de la República, durante los días 6, 7 y 8 de abril de 2020". Resolución reglamentaria ejecutiva REG-EJE-0067-2020 del 13 de abril de 2020, por la cual se modifica el artículo primero de la Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0064 del 30 de marzo de 2020. Resolución Reglamentaria Ejecutiva REG-EJE-0069-2020 del 8 de mayo de 2020, "Por la cual se hace una adición al artículo primero de la Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0067 de 2020". Resolución Reglamentaria Ejecutiva REG-EJE-0070-2020 del 1 de julio de 2020, a partir del 15 de julio de 2020.*

9. La Gerencia Departamental Colegiada del Meta, remitió a través de la plataforma Siref a la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo - Contraloría Delegada Intersectorial 6, el proceso de responsabilidad fiscal N° 80503-2017-28946 para surtir el grado de consulta y se asigna mediante oficio N° 1149 de fecha 12 de septiembre de 2022 para su sustanciación al profesional Hilmer Pumarejo Mindiola.

### Versiones Libres:

- ✓ Escrito de Versión libre de la señora CLAUDIA PATRICIA PARRA DÍAZ, de fecha 7 de octubre de 2021<sup>16</sup>.
- ✓ Escrito de versión libre de la señora GIULIANA CORTES FORERO, sin fecha<sup>17</sup>.
- ✓ Escrito de versión libre de la señora CLAUDIA PATRICIA VELÁSQUEZ MANTILLA, de fecha 13 de octubre de 2021<sup>18</sup>
- ✓ Escrito de versión libre de ANA MILENA ESTUPIÑAN PINTO, de fecha 8 de febrero de 2022<sup>19</sup>

### IV. DECISIÓN OBJETO DE CONSULTA:

La constituye el Auto de Archivo parcial No.400 de fecha 6 de septiembre de 2022, mediante el cual el A-quo luego de relacionar el antecedente, las actuaciones procesales, los hechos, los fundamentos de derecho, de identificar la naturaleza jurídica de la entidad afectada, de relacionar los medios de prueba, procedió a

<sup>16</sup> Visible expediente digital siref 42\_versión libre.pdf

<sup>17</sup> Visible expediente digital siref 46\_versión libre.pdf

<sup>18</sup> Visible expediente digital siref 507\_31\_vl claudia.pdf

<sup>19</sup> Visible expediente digital siref 61\_versión libre.pdf



PRF N° 80503-2017-28946 Ecopetrol – Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

## Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022

señalar los motivos por los cuales ordenó vincular en calidad de presunto responsable a Gonzalo Murillo Escobar y María del Carmen Tonelli Sokolich; mantener la vinculación de los señores Julio César Zuleta Fuentes; Ana Milena Estupiñán Pinto y la Corporación Red País Rural, representada legalmente por Fredy Antonio Vargas Ramírez y decretar el archivo parcial de la presente diligencia en favor de Giuliana Cortés Forero; Claudia Patricia Parra Díaz; Claudia Patricia Velásquez Mantilla y Maribel Cuestas Bohórquez.

La decisión fue adoptada teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

En la providencia consultada, se expone que el presente proceso tiene su origen en la auditoría realizada a la Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol, y que los hechos objeto de este asunto hacen referencia a las irregularidades encontradas en la ejecución del Convenio de colaboración N° 5211512 de 2012, el cual tenía como objeto el: *"Fortalecimiento de las capacidades productivas de las asociaciones y sectores productivos identificados como altamente competitivos en el marco de los procesos y planes regionales de desarrollo desde una perspectiva de sostenibilidad y corresponsabilidad institucional."*, los aportes realizados por ECP asciende a \$3.375.000.000 y de Corporación País Rural \$135.000, con un plazo de ejecución de 18 meses, el 27 de febrero de 2016 se liquida el Convenio, resultando un saldo a favor de ECP por la suma de \$3.043.984.518,01; los cuales a la fecha del traslado del hallazgo fiscal no habían sido reintegrados, que la Aseguradora Solidaria de Colombia, la cual ampara el Convenio investigado, reconoce una parte del valor determinado como detrimento patrimonial (\$2.755.272.804). El valor restante (\$288.711.714) no lo reconoce por objetar parcialmente la reclamación, toda vez que corresponde al giro de recurso en el adicional No. 1, el cual no fue girado a la cuenta de fiducia sino a la cuenta directa del contratista.

Manifiesta el A-quo, que en el entendido que la aseguradora que amparaba estos recursos, no asumió esta pérdida por haberse configurado incumplimiento a las condiciones contractuales, al haberse efectuado el giro directamente a la cuenta de la entidad ejecutora y no a la cuenta aperturada para manejar la totalidad de los recursos del convenio, situación que hoy se torna casi imposible de recuperar, máxime cuando en el proceso adelantado ante la jurisdicción contenciosa ya existe un fallo de primera instancia que negó las pretensiones a ECOPETROL como demandante.

La primera instancia, teniendo como base el análisis adelantado a las pruebas trasladadas con el hallazgo y a las recaudadas en el desarrollo del presente proceso de responsabilidad fiscal, pudo establecer que los funcionarios que, en ejercicio de sus funciones, esto es, en calidad de gestores fiscales, fueron determinantes en la configuración del daño al patrimonio de la entidad pública Ecopetrol, con ocasión, como ya se ha venido mencionado, del giro de recursos por valor de \$2.000 millones de pesos correspondientes al Adicional No. 1 del Convenio

PRF N° 80503-2017-28946 Ecopetrol – Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

## **Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022**

5211512, a la cuenta de la Entidad Ejecutora y no a la cuenta de la Fiducia constituida para tal fin, y que por consiguiente se procederá a vincular al presente proceso de responsabilidad María del Carmen Tonelli Sokolich, quien respecto del Convenio 5211512 ejercía las funciones de Directora de Gestión Social, y que además fue quien de manera directa aprobó el giro del recurso materia de la presente investigación y Gonzalo Murillo Escobar, quien respecto del Convenio 5211512 ejercía las funciones de Administrador, y por consiguiente era quien tenía a su cargo la vigilancia y control de la correcta ejecución del Convenio en cuestión.

Ahora bien, respecto a que se ha establecido con claridad la participación de los presuntos responsables en el hecho investigado, el A-quo, considera pertinente desvincular, y por ende ordenar el archivo respecto de los siguientes implicados.

Guiliana Cortés Forero, vinculada a Ecopetrol desde el 3 de septiembre de 2007, como Líder y posteriormente desde el 16 de agosto de 2012 como funcionario autorizado, en ejercicio de estas funciones suscribió el Convenio 5211512 y el Adicional 1 del mismo. Es decir, en términos generales, el funcionario autorizado, es el encargado de la fase precontractual, presentar ante el Comité Aprobador de Convenios, el respectivo proceso contractual, una vez autorizado por dicho comité, suscribe el contrato y/o convenio y procede a designar el Administrador y Gestor Técnico quienes asumen la responsabilidad de la etapa de ejecución del contrato o convenio.

Claudia Patricia Parra Díaz, vinculada a Ecopetrol desde el 4 de mayo de 2005, fungió como Funcionario Autorizado del Convenio 5211512, y en virtud de ello, suscribió el adicional 2, el rol del funcionario autorizado se circunscribe específicamente a la etapa de planeación y precontractual, a la suscripción del contrato o convenio y a la designación de los funcionarios encargados de velar por la ejecución del mismo, esto es, el administrador y el gestor técnico y administrativo, y en nada tiene relación con la aprobación y/o autorización de pagos.

Claudia Patricia Velásquez Mantilla, vinculada a Ecopetrol desde el 15 de septiembre de 1997 y hasta el 30 de octubre de 2020, fungió como funcionario autorizado del Convenio 5211512, y en virtud de ello, suscribió el adicional 3, es decir, su conducta en nada tiene relación con la aprobación y/o autorización de pagos, razón por demás suficiente para determinar igualmente su desvinculación y por ende, ordenar el archivo de las diligencias

Maribel Cuestas Bohórquez, vinculada a Ecopetrol desde el 17 de diciembre de 2013 y hasta el 16 de diciembre de 2015, ostentado el cargo de Profesional II Gestor Técnico Coordinación Viabilidad Social, no se le puede endilgar responsabilidad alguna, en atención a que, si bien es cierto que se encontraba adscrita al área de Gestión Social, no tuvo ninguna relación con el Convenio 5211512, nunca fue designada como Funcionario Autorizado, ni como Administrador o Gestor Técnico





## Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022

y/o Administrativo, al no tener asignado ninguno de los roles antes descritos, no participó ni en la etapa de planeación, ni en la etapa de ejecución del Convenio objeto del presente proceso,

Por lo anterior expuesto el A-quo, procede a archivar parcialmente la presente acción a favor de Giuliana Cortés Forero, Claudia Patricia Parra Díaz, Claudia Patricia Velásquez Mantilla y Maribel Cuestas Bohórquez, conforme lo estipula el Artículo 47 de la Ley 610 del 200, que establece que habrá lugar a proferir auto de archivo cuando entre otras de compruebe la operancia de una causal excluyente de responsabilidad.

Respecto al tercero civilmente responsable, se tiene que se vinculó a la compañía aseguradora Seguros Colpatria S.A., en atención a la póliza N° 30, la cual ampara a los presuntos responsables fiscales, se mantiene la vinculación de la compañía mencionada en calidad de Terceros Civilmente Responsable, de igual forma procede a la vinculación de la aseguradora La Previsora S.A, toda vez que ampara a los presuntos responsables bajo la póliza de seguros responsabilidad civil N° 1008319.

### V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO.

Para responder de manera adecuada al problema jurídico que plantea el caso concreto, se expondrá una consideración general sobre: (A) El grado de consulta en el proceso de responsabilidad fiscal y (B) Conceptos fundamentales de la responsabilidad fiscal:

#### A. El grado de consulta en el proceso de responsabilidad fiscal:

El artículo 18 de la Ley 610 de 2000 consagra el grado de consulta dentro de los procesos de responsabilidad fiscal en los siguientes términos:

*“Se establece el grado de consulta en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales. Procederá la consulta cuando se dicte auto de archivo, cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por un defensor de oficio, en desarrollo del cual se podrá revisar integralmente la actuación, para modificarla, confirmarla o revocarla, tomando la respectiva decisión sustitutiva u ordenando motivadamente a la primera instancia proseguir la investigación con miras a proteger el patrimonio público (...).”*

De la norma transcrita se concluye que el grado de consulta procede como el mecanismo legal, en el proceso de responsabilidad fiscal a través del cual el superior jerárquico de quien profiere la decisión, bien sea de (i) archivo o un (ii) fallo sin responsabilidad fiscal o (iii) cuando habiendo dictando un fallo que declare la responsabilidad, el responsable hubiese estado representado por un apoderado de



PRF N° 80503-2017-28946 Ecopetrol – Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

## Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022

oficio, la modifique, confirme, revoque u ordene con la motivación respectiva que la primera instancia prosiga con la investigación con el fin de proteger el patrimonio público.<sup>20</sup>

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el grado de consulta, de la siguiente forma:

*"Es una institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo.*

*La competencia funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida. La consulta opera por ministerio de la ley y, por consiguiente, la providencia respectiva no queda ejecutoriada sin que previamente se surta aquélla"*<sup>21</sup>

*"No se trata, pues, de un auténtico recurso, sino de un grado jurisdiccional. Como quien dice, de una segunda instancia. La consulta es la revisión que el superior jerárquico hace de algunas providencias, por mandato de la ley, esto es, sin que medie impugnación proveniente del sujeto procesal que se considere agraviado, sino que actúa oficiosamente.*

*Por esa razón, no puede tenerse como recurso. Pero los fines que se satisfacen con ella son los mismos de los recursos. También en estos casos el superior jerárquico ante quien se consulta la providencia la revoca -total o parcialmente-, o la confirma."*<sup>22</sup>

En efecto, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional ha calificado la consulta como un control automático, oficioso y sin límites en cuanto a su examen, al punto que no se le aplica el principio de la no reformatio in pejus.<sup>23</sup>

Desde la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el Consejo de Estado ha entendido que "mediante el grado de consulta se otorga competencia al superior del funcionario para revisar oficiosamente los actos administrativos por los cuales se ha resuelto definitivamente la actuación administrativa o han hecho imposible continuar su trámite".

En materia de precedente administrativo, el Contralor General de la República, ha concluido que la consulta "permite examinar integralmente y sin limitación alguna el

<sup>20</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 22 de octubre de 2015. C.P: Guillermo Vargas Ayala. Radicado 63001-23-31-000-2008-00156-01.

<sup>21</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-153 de 1995.

<sup>22</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-449 de 1996.

<sup>23</sup> Corte Constitucional. Sentencias C-968 de 2003, C-670 de 2004 y T-005 de 2013.



PRF N° 80503-2017-28946 Ecopetrol – Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

## Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022

*asunto, toda vez que como se mencionó, su finalidad es la defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales.*<sup>24</sup>

En consecuencia, quien conoce en grado de consulta, debe analizar si lo actuado dentro del proceso de responsabilidad fiscal, se encuentra “dentro de los postulados constitucionales y legales, atendiendo la finalidad por la que se instituyó el grado de consulta en la Ley 610 de 2000 o, si en su defecto, hay lugar a revocar la decisión objeto de análisis”.

La Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, frente a la finalidad del grado de consulta, determinó en el Concepto Jurídico EE18786 de junio 23 de 2004 lo siguiente:

*“Sobre el grado de consulta debemos señalar que este no es un recurso, sino un grado de competencia, que se surte en los casos expresamente consagrados en la ley, en materia de responsabilidad fiscal fue instituido para proteger el interés público, el ordenamiento jurídico y los derechos y garantías fundamentales.*

*En el grado de consulta el superior funcional del funcionario de primera instancia que tomó la decisión verifica que la actuación y la decisión que se revisan correspondan a los presupuestos fácticos y jurídicos del proceso de responsabilidad fiscal”.*

Aunado a lo anterior, en el concepto 2013EE22001 del 22 de marzo, reiteró:

*“Las decisiones que se tomen en instancia de grado de consulta deben obedecer precisamente a la defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales, y si la providencia que se revisa es contraria a ello, es procedente proferir una decisión atendiendo a la garantía de tales eventos”.*

Así las cosas, en los eventos en que por mandato de la ley se adelante el grado de consulta, el superior jerárquico se pronunciará sin límite diferente a la Constitución y la ley, por lo cual su competencia contempla plenas facultades para confirmar, modificar, revocar u ordenar que se continúe con la investigación por parte de la primera instancia.

### **B. Conceptos fundamentales de la responsabilidad fiscal:**

En el núcleo de la responsabilidad fiscal, se encuentra el concepto de la gestión fiscal, el cual está relacionado con el correcto manejo de los bienes o fondos públicos. La gestión fiscal es definida por el artículo 3 de la Ley 610 de 2000, de la siguiente manera:

<sup>24</sup> Se pueden consultar las decisiones: 80112-0157:15-08-2019, 80112-0166: 21-08-2019, 80112-0228:29-11-2019 y 80112-0243:26-12-2019.



PRF N° 80503-2017-28946 Ecopetrol – Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

## Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022

*“Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales”.*

La responsabilidad fiscal buscar evaluar y si es del caso, atribuir responsabilidad a un sujeto habilitado para la gestión de bienes y fondos públicos; una persona que en virtud de un título jurídico ha sido acreditada para el manejo o administración del patrimonio público<sup>25</sup>. Adicionalmente, esta responsabilidad se extiende a servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del daño al patrimonio público.

Ahora, la atribución de la responsabilidad fiscal siempre es de carácter subjetiva y cualificada, esto es, a título de dolo o culpa grave. Para la ley y la jurisprudencia<sup>26</sup> debe existir entre dicha imputación y el daño generado al patrimonio público, una relación causal, esto es un nexo o conexión entre el daño causado y la conducta dolosa o gravemente culposa se atribuye al investigado.

Para que se configure la responsabilidad fiscal, deben darse los elementos consagrados en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, esto es: (1) Un daño patrimonial al Estado, (2) Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal o de quien participe, concorra, incida o contribuya directa o indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado y (3) Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

### 1. El daño:

Frente al elemento de daño patrimonial al Estado, el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, precisa lo siguiente:

*“(…) se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de*

<sup>25</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-840 de 2001.

<sup>26</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-619 de 2002.

PRF N° 80503-2017-28946 Ecopetrol – Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

## Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022

*quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo”.*

El daño patrimonial al Estado es el elemento de partida de la responsabilidad fiscal, sin él, no surge la obligación de indemnizar. Al respecto, la Corte Constitucional desde el año 1996, ha entendido:

*“De este modo, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una declaración jurídica, en la cual se precisa con certeza que un determinado servidor público o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan por sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar el daño causado al erario público, por su conducta dolosa o culposa.*

*Para la estimación del daño debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse, debe considerarse que aquél ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. En el proceso de determinación del monto del daño, por consiguiente, ha de establecerse no sólo la dimensión de éste, sino que debe examinarse también si eventualmente, a pesar de la gestión fiscal irregular, la administración obtuvo o no algún beneficio”<sup>27</sup>.*

En el mismo sentido, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha determinado que el “*carácter cierto del daño es una de las condiciones de su existencia*”<sup>28</sup>, por lo que la ausencia del daño conlleva a la imposibilidad de declarar la responsabilidad fiscal. En este sentido, el artículo 53 de la Ley 610 de 2000 prescribe:

*“El funcionario competente proferirá fallo con responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el proceso obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización y actuación cuando menos con culpa del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable”.*

En términos prácticos, el Consejo de Estado ha admitido que el presupuesto de certidumbre del daño fiscal implica que este no debe ser eventual o hipotético, el perjuicio que se deriva de la conducta reprochada debe existir, lo que supone la obligación de determinar si el mismo tuvo ocurrencia o no, mediante el análisis de los medios de prueba que se allegan al proceso<sup>29</sup>.

A través del carácter cierto de la lesión a los bienes del Estado, se busca corroborar que la afectación al Estado, esto es el daño es: “verdadero, seguro e indubitable”<sup>30</sup>.

<sup>27</sup> Corte Constitucional. Sentencia SU-620 de 1996. M.P: Antonio Barrera Carbonell.

<sup>28</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P: Guillermo Vargas Ayala. Sentencia del 22 de octubre del 2015. Radicado 63001-23-31-000-2008-00156-01.

<sup>29</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. C.P; Lucy Jeannett Bermúdez Bermúdez. Sentencia del 23 de agosto 23 de 2018.

<sup>30</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. C.P; Lucy Jeannett Bermúdez Bermúdez. Sentencia del 23 de agosto 23 de 2018.



PRF N° 80503-2017-28946 Ecopetrol – Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

## Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022

Frente a la certeza del daño, el artículo 4 de la Ley 610 de 2000, establece el objetivo de la responsabilidad fiscal, así como el grado de imputación subjetiva o culpabilidad para su atribución, dice la norma en comentario:

*"Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción de los mismos, mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión fiscal.*

*Parágrafo. La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad".*

### 2. La conducta:

Frente al elemento de la culpabilidad en la responsabilidad fiscal, corresponde al dolo o la culpa grave, estándar que no solo tiene un carácter legal, sino constitucional, al establecer el artículo 90 de la Constitución la obligación del Estado de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, admitiendo también la responsabilidad subjetiva de los funcionarios con base en los conceptos de dolo y culpa grave, por cuanto es posible que el daño se genere a partir de la acción u omisión de los servidores públicos, esto es, de un comportamiento que puede ser reprochable por irregular o ilícito.<sup>31</sup>

Debe insistirse en que la responsabilidad fiscal es *"de carácter subjetivo, pues para deducirla es necesario determinar si el imputado obró con dolo o con culpa. Al respecto, ha dicho la Corte que en materia de responsabilidad fiscal está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y, por tanto, la misma debe individualizarse y valorarse a partir de la conducta del agente"*<sup>32</sup>.

Frente a la valoración subjetiva de la conducta del agente, esto es la determinación del actuar con dolo o culpa grave, es necesario destacar que estas categorías volitivas no se encuentran definidas en la Ley 610 de 2000, por lo cual es necesario acudir a las fuentes del derecho para su adecuada aplicación.

En primer lugar, debe decirse que el artículo 118 de la ley 1474 de 2011, establece una serie de presunciones sobre el dolo y la culpa grave, más no realiza definición alguna de estos grados de culpabilidad.

<sup>31</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-840 de 2001. M.P: Antonio Barrera Carbonell, también se puede consultar la Sentencia C430 de 2000.

<sup>32</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-338 de 2014. M.P: Alberto Rojas Ríos.



## Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022

Complementando lo anterior, el Código Civil en su artículo 63 define al dolo como *"la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro"*. Por su lado, el mismo artículo en referencia define la culpa grave como *"la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo"*.

La Corte Constitucional ha explicado que el obrar doloso, se determina en el caso concreto, de acuerdo con los medios de prueba obrantes en el proceso, pero esto no es obstáculo para concluir que ciertas conductas son eminentemente dolosas, como ocurre cuando el servidor público que no tuvo la precaución de verificar la realidad del supuesto fáctico a la hora de expedir el acto correspondiente o cuando la decisión ha sido adoptada sin aparente sustento legal<sup>33</sup>.

Desde el punto de la analogía, el dolo es definido por el artículo 5 de la Ley 678 de 2011, cuando *"el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado"*.

En lo referente a la culpa grave, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia<sup>34</sup> ha entendido que esta hace referencia a *"la torpeza absoluta del funcionario, o aquellos desaciertos que no pueden excusarse, es decir los que no tengan razón válida alguna que puedan exonerarlo o disculparlo"*<sup>35</sup>.

Esta línea es recogida por la Corte Constitucional, al expresar que no cualquier error es equiparable a la culpa grave, este tipo de culpabilidad, sólo se predica del error que por sus dimensiones solo pudo haberse cometido con total negligencia.

En este sentido, el dolo surge por un abuso u omisión en el ejercicio de los poderes atribuidos, mientras que la culpa grave se producirá por el error inexcusable en el ejercicio u omisión de las labores encomendadas.

### 3. Del nexo causal:

El tercer elemento integrante de la responsabilidad fiscal es la existencia de un nexo de causalidad entre la conducta y el daño, el cual implica una relación determinante y condicionante de causa - efecto de manera que el daño sea el resultado de una conducta activa u omisiva.

Teniendo en cuenta que la razón jurídica de la responsabilidad fiscal es la protección del patrimonio del Estado, su finalidad es entonces eminentemente reparatoria y

<sup>33</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-455 de 2002. M.P: Marco Gerardo Monroy Cabra.

<sup>34</sup> Citada en la Sentencia de la Corte Constitucional C-455 de 2002.

<sup>35</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de febrero de 1988. M. P: Eduardo García Sarmiento.

PRF N° 80503-2017-28946 Ecopetrol – Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

## Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022

resarcitoria, y está determinada por un criterio normativo que se estructura con base en el dolo y la culpa grave, partiendo del daño antijurídico sufrido por el Estado y del nexo de causalidad entre el daño y la actividad del agente, porque quienes cumplen gestión fiscal y quienes actúan con ocasión de ésta manejan directamente o indirectamente recursos estatales y por ello les asiste el deber de orientar esos recursos a la realización de finalidades que le incumben al Estado.

### VI. DEL CASO EN CONCRETO:

Esta Delegada Intersectorial analizará, conforme a la sana crítica, el caso en estudio, para determinar si la decisión del *a quo* se ajustó a los lineamientos legales que rigen el Proceso de Responsabilidad Fiscal y si, dando cumplimiento a las funciones constitucionales, preservó el derecho fundamental al debido proceso de los presuntos responsables, como le corresponde.

Para proceder a resolver la consulta respecto de la desvinculación de unos presuntos responsables, es importante advertir que, si por algún motivo se llegaré a revocar la decisión de la primera instancia de archivar el expediente, en ese orden de ideas queda vinculado el sujeto procesal beneficiario de la desvinculación, sin qué con ello exista alguna irregularidad sustancial que afecte el debido proceso.

No obstante, lo anterior, esta Intersectorial considera que lo procedente es determinar si la decisión contenida en el auto de desvinculación frente a algún presunto responsable y/o garante, por una parte, se ajusta a la prueba allegada al proceso que permite tomar tal decisión, y por otra, si la misma no implica desconocimiento del debido proceso en relación con quienes continúan vinculados a la investigación.

En atención al Auto No. 400 del 06 de septiembre de 2022, esta Intersectorial observa que la razón de la consulta es el archivo a favor de unos presuntos responsables y no en sí de la desvinculación en consideración a que la norma es clara en establecer que las causales de consulta son: cuando se dicte auto de archivo, cuando el fallo sea sin responsabilidad o cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por un apoderado de oficio.

De conformidad con lo anterior, en el presente caso esta Intersectorial tiene la competencia para conocer en grado de consulta en atención al archivo a favor de los señores: Giuliana Cortés Forero; claudia Patricia Parra Díaz; Claudia Patricia Velásquez Mantilla y Maribel Cuestas Bohórquez.





## Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022

### ➤ De la Desvinculación

La Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, a través de los Conceptos EE18786 del 23 de junio de 2004 y 43417 del 21 de diciembre de 2006, referente a la Desvinculación Procesal y Cesación de la Acción Fiscal, ha dicho lo siguiente:

*“Cuando en un proceso existan varias personas vinculadas al mismo y exista plena prueba de que a alguno de los implicados no le asiste responsabilidad fiscal, procede su desvinculación lo cual no significa que se deba archivar el expediente ni que se finalice la actuación procesal, pues ésta debe continuar con los demás sujetos procesales o encaminarse hacia la identificación de los presuntos responsables hasta cuando se cumpla el término para imputar responsabilidad fiscal o se den los elementos para tomar la decisión final del fallo con o sin responsabilidad fiscal”.*

*(...) en el evento que en el desarrollo de un proceso de responsabilidad fiscal adelantado contra varios sujetos, se dicte **Auto de Archivo** a uno o algunos de los presuntos responsables, acorde a la preceptiva del artículo 18 de la Ley 610 de 2000, se debe surtir el grado de consulta de manera automática y oficiosa, garantizando así la revisión de esta actuación procesal en tiempo real y no esperar la culminación total del proceso con el otro u otros implicados para realizarlo, no hacerlo implicaría obviar en oportunidad una ordenación legal, que podría desencadenar en decisiones adversas al finalizar el proceso que pudiera superarse en su momento procesal y mantener sub-judice al implicado favorecido con la decisión hasta cuando se decida de fondo el proceso”.*

Bajo este concepto de competencia y finalidad del Grado de Consulta, procede el Despacho dentro de la sana crítica y la lógica jurídica, a analizar las actuaciones realizadas por la Primera Instancia, que se concretaron en el auto No. 400 del 06 de septiembre de 2022, que dispuso la desvinculación y archivo a favor de los presuntos responsables fiscales; Giuliana Cortés Forero; Claudia Patricia Parra Díaz; Claudia Patricia Velásquez Mantilla y Maribel Cuestas Bohórquez.

### ➤ Del Hecho Generador del Daño:

Tal y como se estableció en párrafos anteriores, el presente proceso tiene su origen en el hallazgo con presunta incidencia fiscal, donde el equipo auditor determinó que el hecho de objeción fiscal hace referencia al Convenio de Colaboración N°5211512 celebrado entre Ecopetrol S.A y la Fundación Red País Rural, que tenía por objeto *“Fortalecimiento de las Capacidades productivas de las asociaciones y sectores productivos identificados como altamente competitivos en el marco de los procesos y planes regionales de desarrollo desde una perspectiva de sostenibilidad y corresponsabilidad institucional”.*

PRF N° 80503-2017-28946 Ecopetrol – Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

## Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022

El 27 de febrero de 2016 se liquida el Convenio, resultando un saldo a favor de ECP por la suma de \$3.043.984.518,01; los cuales a la fecha del traslado del hallazgo fiscal no habían sido reintegrados, la totalidad del recurso aportado fue debitado de la cuenta bancaria, no obstante, no fue ejecutado en la obra como se evidencia en el avance técnico de la misma, pues claramente el porcentaje no ejecutado en cada desembolso corresponde a un valor mayor que al considerado en las actas que soportaron el desembolso. En conclusión, los recursos no se encuentran ejecutados en obra, y tampoco reposan en la cuenta bancaria

La Aseguradora Solidaria de Colombia, la cual ampara el Convenio investigado, reconoce una parte del valor determinado como detrimento patrimonial (\$2.755.272.804). El valor restante (\$288.711.714) no lo reconoce por objetar parcialmente la reclamación, toda vez que corresponde al giro de Recurso en el Adicional No. 1, el cual no fue girado a la Cuenta de Fiducia sino a la cuenta directa del contratista, por lo tanto, se concluye que existió un presunto detrimento al patrimonio del Estado en cuantía de \$288.711.714.

### ➤ De las Pruebas que Conforman el Expediente:

Conforme a lo anterior y antes de abordar el caso puntual, resulta menester analizar la regulación sobre el tema probatorio dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal, reglado por la Ley 610 de 2000, en cuyo capítulo dedicado al tema (arts. 22 al 32) describe claramente las reglas que se deben tener en cuenta para llegar a la certeza de los hechos en aras de responsabilizar o de ordenar el archivo del proceso de responsabilidad fiscal.

Respecto de las características de conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba, citaremos al tratadista Jairo Parra Quijano<sup>36</sup> quien ha ilustrado este tema definiendo cada característica así:

*“LA CONDOCENCIA. Es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho. Supone que no exista una norma legal que prohíba el empleo del medio para demostrar un hecho determinado. El sistema de la prueba legal, de otra parte, supone que el medio que se emplea, para demostrar el hecho, está consagrado en la ley. La conducencia es una comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de saber, si el hecho se puede demostrar en el proceso, con el empleo de ese medio probatorio.*

<sup>36</sup> “Manual de Derecho Probatorio. Décima quinta edición. Librería Ediciones del Profesional 2006. Autor Jairo Parra Quijano.



PRF N° 80503-2017-28946 Ecopetrol – Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

## Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022

*LA PERTINENCIA. Es la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de la prueba en éste. En otras palabras, es la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso.*

*LA UTILIDAD. Los autores modernos de derecho probatorio resaltan el móvil que debe estimular la actividad probatoria que no es otro que el de llevar probanzas que presten algún servicio en el proceso para la convicción del juez; de tal manera, que, si una prueba que se pretende aducir no tiene este propósito, debe ser rechazada de plano por aquél...* (Pág. 154-156).

Por lo tanto, para que la prueba cumpla con la finalidad de demostrar o desvirtuar el o (los) hecho (s) debe ser conducente, pertinente y útil; lo anterior en concordancia con la finalidad de la acción fiscal cual es el resarcimiento del daño ocasionado al erario y con lo consagrado en el artículo 26 de la Ley 610 de 2000, el cual indica:

**“ARTICULO 26. APRECIACIÓN INTEGRAL DE LAS PRUEBAS.** *Las pruebas deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional”.*

El artículo anterior presenta dos elementos. Por un lado, precisa que las pruebas han de ser analizadas en forma conjunta, lo cual indica que debe examinarse cada una de las que obren en el expediente, análisis que puede realizarse de forma aislada, y, por otra parte, señala cual es el sistema de valoración probatoria que debe aplicar el funcionario fallador, siendo el escogido por el legislador el de la sana crítica y la persuasión racional, desechando el de la tarifa legal.

Es preciso manifestar respecto a la carga probatoria que a través del Concepto 80112-1025 de abril de 2003, se señaló por parte de la Oficina Jurídica de la entidad: *“Práctica de pruebas. La carga probatoria es una facultad discrecional de ofrecer y solicitar pruebas y de intervenir en su práctica. Para que los hechos, cosas y actos que se plantean en el proceso estén debidamente probados, se recurre a la práctica de pruebas. En materia de responsabilidad fiscal le corresponde al Estado, en cabeza del órgano de control fiscal correspondiente, probar los hechos investigados. La Prueba ha sido definida como: “Todo lo que sirve para darnos la certeza acerca de la verdad de una proposición. La Certeza está en nosotros, la verdad en los hechos. Aquella nace cuando uno cree que conoce ésta; más por la fabilidad humana, puede haber certeza donde haya verdad y viceversa”.*

Bajo tales circunstancias, le correspondía al *a quo*, una vez iniciado el proceso, proveerlo de los medios probatorios necesarios para llegar a la certeza del daño, y en aras de establecer la veracidad de los hechos o desvirtuarlos, procedió a valorar el material probatorio allegado al plenario.

Del material probatorio allegado al plenario se aprecia:



PRF N° 80503-2017-28946 Ecopetrol – Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

## Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022

- Copia del Convenio de Colaboración N° 5211512, celebrado entre Ecopetrol S.A. y la fundación Red País Rural<sup>37</sup>
- Copia Guía para la administración y gestión de contratos y convenios<sup>38</sup>.
- Copia informe técnico para la liquidación al convenio 52111784
- Copia de demanda – controversias contractuales, demandante Ecopetrol S.A – demandado Aseguradora Solidaria de Colombia S. A<sup>39</sup>.
- Copia formato de transacciones en caja – Banco de Occidente por valor de \$2.755.272.804<sup>40</sup>

### ➤ Del Daño Patrimonial al Estado.

Efectivamente se observa en el presente caso, que existió una actuación irregular que supone la existencia de un detrimento patrimonial sobre los recursos invertidos por Ecopetrol S.A. en la suma de \$288.711.714, al no ser ejecutados en su totalidad como se evidencia en el avance técnico.

El artículo 6° de la Ley 610 de 2000 precisa que el daño patrimonial al Estado, se entiende como la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control.

Añade la norma que dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento del patrimonio público.

- De la desvinculación y archivo de las diligencias fiscales a favor de los señores: GIULIANA CORTES FORERO, CLAUDIA PATRICIA PARRA DÍAZ, CLAUDIA PATRICIA VELÁSQUEZ MANTILLA y MARIBEL CUESTAS BOHÓRQUEZ.

Una vez valorado el acervo probatorio allegado al plenario, se tiene que efectivamente la primera instancia, en aras de confirmar o desvirtuar los hechos

<sup>37</sup> Visible expediente digital sac antecedente 5211512.pdf

<sup>38</sup> Visible expediente digital sac antecedente 09-2015.pdf

<sup>39</sup> Visible expediente digital siref 11\_8\_3 demanda.pdf

<sup>40</sup> Visible expediente digital siref 12\_8\_2 consignacion.pdf



## Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022

investigados procedió a allegar, recaudar, practicar material probatorio, y darles valor.

Antes de entrar a analizar la conducta de los presuntos responsables que fueron desvinculados de la presente investigación, es pertinente indicar que proceso tiene su génesis en las irregularidades cometidas en la ejecución del Convenio 5211512, específicamente la relacionada con el pago directo de \$2.000 millones a la cuenta de la entidad ejecutora, pago autorizado por la Directora de Gestión Social, y sobre el cual no se hizo el debido seguimiento por los funcionarios a quienes les correspondía hacerlo, Administrador y Gestor Técnico.

La guía para la Administración y Gestión de Contratos 31-10-2011-v-5: Cuando se asigna el administrador y gestor técnico del convenio se le relaciona este documento como guía para el ejercicio de sus funciones, a saber:

En su numeral 3.1. ADMINISTRACION DE CONTRATOS contiene: *“La Administración tiene como finalidad verificar y asegurar el cumplimiento del contrato, además del correcto uso de los recursos dispuestos por Ecopetrol para el desarrollo del mismo. El Administrador es responsable de efectuar el seguimiento continuo al contrato a su cargo, con el acompañamiento de la gestoría administrativa y la gestoría técnica, además de realizar las acciones necesarias para asegurar una correcta ejecución contractual.*

*Es responsable del Administrador garantizar el cumplimiento del contrato y/o tomar acciones para evitar conflictos o problemas futuros materializados en reclamaciones, quejas, modificaciones contractuales, entre otros.”*

### **“...3.5.a FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O CONVENIO**

*Además de las funciones generales asignadas al rol de Administrador del Contrato o Convenio en el numeral 3.1 de la presente Guía, tendrá las siguientes específicas (sin limitarse a ellas):*

*6. Trabajar conjuntamente con el Contratista o la(s) parte(s) dentro del Convenio, con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos planteados con su suscripción, principalmente la satisfacción de las necesidades de la Empresa y/o los intereses comunes dentro del Convenio*

*10. Identificar, analizar, evaluar y soportar de manera clara, completa y concisa las necesidades de modificación del Contrato y los reconocimientos económicos a que hubiere lugar, entre otros; y una vez efectuados tales análisis, formular las recomendaciones respectivas al funcionario Solicitante para que este último las solicite al Funcionario Autorizado; y adicionalmente, presentar dichas recomendaciones y sus justificaciones ante los Comités Asesores que el Funcionario Autorizado organice para tratar dichos asuntos.*

PRF N° 80503-2017-28946 Ecopetrol – Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

## Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022

Se observa que el 20 de noviembre de 2012, en el adicional No. 1 del citado convenio, tanto el gestor, como el administrador solicitan una nueva adición, la cual se firma el 6 de diciembre del año 2012, por \$2.000.000.000, cuya aprobación por la Dirección de Gestión Social, se hace el 12 de diciembre de 2012 y su giro se realiza el 14 del mismo mes y año a la cuenta Corriente No. 291-01128-6 del Banco de Occidente a nombre de Corporación Red País Rural y no a la Cuenta de Encargo Fiduciario No. 3-1-2796 con Fiduciaria de Occidente S.A., constituida por la entidad ejecutora al inicio del convenio primigenio.

Ahora bien, los presuntos responsables a quienes se les archiva parcialmente las diligencias fiscales, en ejercicio del derecho de defensa rinden versión libre, y sobre los hechos objeto de reproche manifiestan entre otros aspectos los siguientes:

La señora Claudia Patricia Parra Díaz, manifiesta que los hechos investigados se relacionan con la etapa de ejecución del convenio y cuya responsabilidad atañe única y exclusivamente al área usuaria a través de la Gestoría y Administrador del Convenio tal como lo dispone de manera expresa el Anexo 01 "Gestión para la celebración de convenios y contratos de que trata el artículo 355 de la Constitución política" de la Guía de Convenios y Contratos del artículo 355 de la Constitución Política" GAB-G 004, documento que a la letra dispone en el numeral 1.7.4 Asignación de la Administración y Gestoría del Convenio o Contrato "(...) La gestoría técnica y administrativa estará a cargo de cada Dirección Usuaria; no obstante aquella gestoría se podrá contratar con un tercero; en tal caso no se le asignará a este la facultad administrativa de realizar en los sistemas internos de Ecopetrol la actividad de pagos y/o desembolsos de aportes. En este último caso la responsabilidad en materia de pagos o desembolsos corresponderá exclusivamente al administrador de Ecopetrol, y que no es posible que se le atribuya responsabilidad frente a los hechos investigados, ya que queda demostrado que no le corresponde ejercer funciones frente a la ejecución del contrato y por el contrario la gestión que le corresponde como funcionario autorizado la ejerció de manera idónea, mediante la suscripción del adicional No. 2 al convenio 5211512 en la que se estableció en el numeral segundo, la entrega del aporte de **ECOPETROL** en virtud del presente adicional se efectuará al encargo fiduciario No. 3-1-2796 con Fiducia de Occidente S.A, que fue constituida por la entidad ejecutora al inicio del Convenio primigenio

En la versión libre la señora Giuliana Cortés Forero, señala lo siguiente; frente al convenio 5211512, ejerció el rol de Funcionario Autorizado, conforme al marco de funciones asignadas, con alcance sobre la aprobación, celebración y suscripción del convenio, bajo el marco dispuesto por el Procedimiento para la celebración de convenios y contratos de que trata el art. 355 Constitución política ECP-DAB-P-068 vigente desde el año 2010 hasta el año 2013, la Guía de gestión de convenios GAB-G-004 Guía de convenios y contratos del artículo 355 de la constitución política y su anexo 01 Gestión para la celebración de convenios y contratos de que trata el artículo 355 de la Constitución Política su anexo 1 y el Manual de delegaciones de



## Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022

autoridad PDO-M-001, afirma que como demostró, carecen de relación alguna con el hallazgo fiscal que dio lugar a la apertura del presente proceso, respecto del cual el auto 054 señala la existencia de daño patrimonial derivado de ejercicio de funciones determinantes como la aprobación del giro de los recursos del adicional 1 a una cuenta diferente a la del encargo fiduciario y la gestión del comité de seguimiento, actividades ajenas a sus funciones por lo que al no corresponderle ejecutarlas, no podría haber incurrido en acción ni en omisión culposa o dolosa alguna, simplemente porque le correspondía ejercerlas. Se evidencia claramente que es el señor Julio Cesar Zuleta quien aprueba la transferencia de los recursos del encargo fiduciario a una cuenta bancario de la Fundación, así reposa en el acta del Comité de Seguimiento que se realizó el 8 de marzo de 2013.

Por su parte, la señora Claudia Patricia Velásquez, manifiesta que en el convenio investigado tuvo el rol de Funcionaria Autorizada durante una parte del tiempo en que estuvo vigente el convenio, no estaba dentro de sus funciones de ni la aprobación o giro de los recursos, que como asignación funcional corresponde al Administrador y/o Gestor del Convenio, ni formar parte del Comité de seguimiento, por cuanto se trataba de un Convenio con Objeto Social en el que participaron como representantes de Ecopetrol los Funcionarios de la Dirección de Gestión Social, tal y como se puede evidenciar al consultar las diferentes actas del comité que forman parte del acervo probatorio, en los documentos relacionados la funcionaria autorizada no tiene facultades para aprobar desembolsos o pagos sino el administrador del convenio.

Respecto a la conducta de las señoras, GIULIANA CORTÉS FORERO; CLAUDIA PATRICIA PARRA DÍAZ y CLAUDIA PATRICIA VELÁSQUEZ MANTILLA., observa este despacho, que desempeñaron el cargo de Funcionario Autorizado del Convenio de Colaboración 5211512 de 2012, suscrito entre la empresa ECOPETROL S.A., y la Fundación RED País Rural, durante el periodo comprendido del 3 de septiembre de 2007 al 16 de agosto de 2012, desde el 4 de mayo de 2005 y desde el 15 de septiembre de 1997 hasta el 30 de octubre de 2020, respectivamente, quienes en ejercicio de sus funciones suscribieron el adicional 1, 2 y 3 del citado Convenio, y dentro de sus responsabilidades se encuentra entre otras la de designar el Administrador, Gestor Técnico y el Gestor Administrativo, de acuerdo a las consideraciones del funcionario solicitante, y específicamente se le impide ejercer el rol de administrador del contrato, en ese orden de ideas, el Funcionario Autorizado, es el encargado de la fase precontractual, presentar ante el comité aprobador de Convenios, el respectivo proceso contractual, una vez autorizado por dicho comité, suscribe el contrato y/o convenio y procede a designar el Administrador y el Gestor Técnico quienes asumen la responsabilidad de la etapa de ejecución del contrato o convenio.

Es decir, el gestor técnico y/o el gestor administrativo son los encargados de crear la orden de entrada u orden de servicios que permite afectar presupuesto para la



PRF N° 80503-2017-28946 Ecopetrol – Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

## **Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022**

ejecución del pago, así mismo, el administrador podrá ordenar pagos hasta el monto autorizado en los contratos que administra de acuerdo a lo consignado en la Guía para la Administración y Gestión de Contratos y Convenios GAB-G-001 V-1, vigente para la época de los hechos.

Comparte este despacho, la tesis del A-quo de desvincular del presente proceso de responsabilidad fiscal y el correspondiente archivo a las señoras Giuliana Cortés Forero; Claudia Patricia Parra Díaz y Claudia Patricia Velásquez Mantilla, debido a que el rol del funcionario autorizado se circunscribe específicamente a la etapa de planeación y precontractual, a la suscripción del contrato o convenio y a la designación de los funcionarios encargados de velar por la ejecución del mismo, esto es, el administrador y el gestor técnico y administrativo, y en nada tienen relación con la aprobación y/o autorización del pago de los \$2.000 millones a la cuenta de la entidad ejecutora, sobre el cual no se hizo el debido seguimiento por los funcionarios responsables, es por ello que la irregularidad cometida en la ejecución del Convenio 5211512, no puede ser atribuida a las señoras Cortés Forero; Parra Díaz y Velásquez Mantilla, es por ello que no se le puede endilgar responsabilidad alguna ni omisión y negligencia de las funcionarias en el ejercicio de sus funciones, en consecuencia se confirmará la providencia objeto de consulta, cual es el archivo de las diligencias fiscales a su favor.

Respecto a la conducta de la señora MARIBEL CUESTAS BOHORQUEZ., se observa que ejerció el cargo de Profesional II Gestor Técnico Coordinación Viabilidad Social de Ecopetrol durante el periodo comprendido del 17 de diciembre de 2013 hasta el 16 de diciembre de 2015, tal como lo manifiesta la primera instancia, que si bien es cierto se encontraba adscrita al área de gestión social, nunca fue designada como funcionario autorizado, ni como administrador o gestor técnico y/o administrativo, por ende no participó ni en la etapa de planeación, ni en la etapa de ejecución del convenio de colaboración 5211512 de 2012 y mucho menos autorizó el desembolso de los recursos a la entidad ejecutora, respecto a ellos cuales hoy se predica la irregularidad que conllevó al presunto detrimento patrimonial de \$288.711.714. Es por ello que no se le puede endilgar responsabilidad alguna ni omisión y negligencia de la funcionaria en el ejercicio de sus funciones, en consecuencia, se confirmará la providencia objeto de consulta, cual es el archivo de las diligencias fiscales a su favor

Por las consideraciones y razones legalmente expuestas en este proveído, este despacho procede a confirmar el artículo 1° del auto N° 400 del 06 de septiembre de 2022, mediante el cual se ordena archivar parcialmente a favor de las señoras Giuliana Cortés Forero; Claudia Patricia Parra Díaz; Claudia Patricia Velásquez Mantilla y Maribel Cuestas Bohórquez, dentro del proceso de responsabilidad fiscal N° 80503-2017-28946, proferido por los directivos de la Gerencia Departamental Colegiada del Meta.





PRF N° 80503-2017-28946 Ecopetrol – Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

## Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022

Bajo las consideraciones y razones legalmente expuestas en el presente proveído, la Contralora Delegada Intersectorial No. 6 perteneciente a la Unidad de Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República,

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Confirmar la decisión de archivo parcial contenida en el Auto No. 400 de fecha 06 de septiembre de 2022, proferido por la Gerencia Departamental Colegiada del Meta, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF-80503-2017-28946 a favor de Giuliana Cortés Forero, identificada con C.C. N° 52.267.791 en su calidad de funcionaria autorizada – Ecopetrol; Claudia Patricia Parra Díaz, identificada con C.C. N° 63.296.556 en calidad de funcionaria autorizada – Ecopetrol; Claudia Patricia Velásquez Mantilla, identificada con C.C. N° 63.445.728 en calidad de funcionaria autorizada – Ecopetrol y Maribel Cuesta Bohórquez, identificada con C.C. N° 21.178.884 en calidad de profesional II. Gestor técnico - Ecopetrol, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

**ARTICULO SEGUNDO:** La Gerencia Departamental Colegiada del Meta, deberá notificar la presente providencia conforme a lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, a los presuntos responsables fiscales, garantes y/o apoderados para lo cual deberá tener en cuenta el Memorando 2020IE0060226 de 28 de septiembre de 2020, suscrito por el Vicecontralor General de la República.

**ARTÍCULO TERCERO:** Por el Sistema de Información de Responsabilidad Fiscal - SIREF, realizar los respectivos registros y trasladar el expediente a la Gerencia de Origen, en aplicación de lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria Orgánica No. REG-ORG-0036-2020 de junio 17 de 2020, de la Contraloría General de la República.

**ARTÍCULO CUARTO:** En el evento de que con posterioridad aparecieran nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base para el archivo, o se demostrare que la decisión se basó en prueba falsa, se ordenará la reapertura de la actuación fiscal, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 610 de 2000.



PRF N° 80503-2017-28946 Ecopetrol – Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

## Auto No. URF2-1291 del 12 de Octubre del 2022

**ARTÍCULO QUINTO:** En caso de que se hayan decretado medidas cautelares, respecto de los sujetos procesales a quienes se les archivó las diligencias procesales, la Gerencia Departamental Colegiada del Meta, procederá a levantarlas

**ARTÍCULO SEXTO:** Contra la presente providencia no procede recurso alguno.

**COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**CARMEN PAOLA VÉLEZ MARROQUIN**  
**Contralora Delegada Intersectorial**  
**Unidad de Responsabilidad Fiscal No 6**

Sustanció: Hilmer Pumarejo Mindiola  
Profesional URF – C.D. Intersectorial 6

**SECRETARÍA COMÚN**

**NOTIFICACION POR ESTADO No.149 META 20 de octubre de 2022**

N° DEL EXPEDIENTE/ENTIDAD AFECTADA	RESPONSABLES/EJECUTADOS/INVESTIGADO S	PROVIDENCIA Y CONTENIDO	FECHA DEL AUTO	FOLIO S
PRF-80503-2017-28946-EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL NIT.899.999.068-1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>CORPORACION RED PAIS RURAL NIT.830.131.208. R/L Fredy Antonio Vargas Contratista Y OTROS.</li> <li>GARANTE</li> <li>SEGUROS COLPATRIA NIT.860.002.184-6 Póliza de manejo global tipo: Infidelidad N°30.</li> </ul>	AUTO URF2-1291 POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE EL GRADO DE CONSULTA DEL AUTO DE ARCHIVO PARCIAL No.400 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	12 OCTU BRE DE 2022.	1-26

Los sujetos procesales que necesiten tener una copia de las providencias notificadas, deben enviar la solicitud dirigida al operador jurídico que tramita la actuación, indicando nombres y apellidos completos, condición en la que actúa, el número del Estado y el número de auto del que necesita copia, a través del correo [responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co](mailto:responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co). Igualmente, las personas que no puedan hacer uso de ningún medio tecnológico para obtener copia de las decisiones, pueden enviar la solicitud a través de correo postal a la dirección de la sede de la entidad donde se tramita la actuación o solicitar el agendamiento de atención presencial de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 pm. La presente Notificación por Estado se fija en la página web de la Contraloría General de la República en la URL: <https://www.contraloria.gov.co/resultados/notificaciones-ycitaciones/notificaciones-por-estado>, a las 8:00 AM de hoy 20 de Octubre de 2022 y se desfija a las 6:00 PM de hoy 20 de Octubre de 2022.

**DIANA MARCELA ARISMENDY REY**  
Profesional Universitario – Asignado a Secretaría Común

Avenida 40 Calle 15 Esquina Centro Comercial Llano Centro Oficina 4 Piso •6701408/21  
Villavicencio • Colombia • [www.contraloriagen.gov.co](http://www.contraloriagen.gov.co)